

«RIT»

Foja: 1

FOJA: 44 .- .-

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 1º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-8810-2020
CARATULADO : CAVA/FISCO DE CHILE - CONSEJO DE
DEFENSA DEL ESTADO

Santiago, treinta de Noviembre de dos mil veintitrés

VISTOS:

A folio 1, rectificada a folio 7, comparece el abogado Omar Fernando Cabrera Cabezas, en calidad de mandatario judicial de: 1) **HEDDY LEONOR SAN JUAN ROJAS**, pensionada; 2) **CARLOS HENRIQUE MORENO AGURTO** jubilado; 3) **MANUEL JESÚS MAULEN LOYOLA**, jubilado; 4) **RAFAEL ENRIQUE PEREZ CUEVAS**, empleado; 5) **SONIA PAZ RAMIREZ KRALJEVICH**, independiente; 6) **VICTORIA GUILLERMINA VICUÑA LLAITUL**, comerciante; 7) **ALEN LOBOS SANCHEZ**, jubilado; 8) **WALDO MILTON CRUZ NAVARRETE**, independiente; 9) **FERNANDO SEGUNDO CAVA ZAPATA**, cesante; y 10) **MANUEL BENJAMIN ARCE VIVANCO**, obrero; todos domiciliados para estos efectos en Pasaje Doctor Sotero del Rio N°326, oficina 409, comuna y ciudad de Santiago, interponiendo demanda de indemnización de perjuicios, en juicio ordinario, en contra del **FISCO DE CHILE**, representado legalmente por Juan Antonio Peribonio Poduje, presidente del Consejo de Defensa del Estado, con domicilio en Agustinas N° 1225, Piso 4, comuna de Santiago, solicitando se le condene a pagar a cada uno de los demandantes la suma de \$200.000.000, o la suma de dinero que se estime en justicia y equidad, más reajustes e intereses desde la fecha de interposición de la demanda y hasta el pago efectivo, todo ello con costas.

Señala que sus mandantes se encuentran calificados como víctimas en los listados de prisioneros políticos y torturados, elaborados por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, establecidos por el Decreto Supremo N° 1.040, del año 2003, del Ministerio del Interior, conocida como Comisión Valech I y su segundo reconocimiento denominado Comisión Valech II.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VXTJXJXXNCZ

«RIT»

Foja: 1

Añade que de San Juan Rojas, fue detenida el 25 de agosto de 1974; Moreno Agurto, el 25 de enero de 1982; Maulén Loyola, los primeros días de 1974; Pérez Cuevas, el 20 de marzo de 1985; Ramírez Kraljevich, el 20 de Marzo de 1985; Arce Vivanco, el 12 de septiembre de 1973; Vicuña Llaitul, el 27 de Mayo de 1985; Lobos Sánchez, el 6 de noviembre de 1974; Cruz Navarrete, el 11 de mayo de 1984; y Cava Zapata, el 14 de septiembre de 1973, respectivamente.

Manifiesta que las detenciones fueron violentas, siendo golpeados y torturados, circunstancias de las que se desprende que sufrieron daños o perjuicios tanto físicos como psicológicos provocados por agentes del Estado durante el gobierno dictatorial, mismos que deben ser reparados.

Como fundamentos jurídicos de su pretensión invoca los artículos 2, 4, 5, 6, 7 y 38 de la Constitución Política; artículos 4 y 42 la Ley 18.575, que establece la responsabilidad del Estado en diversos artículos; cita doctrina y jurisprudencia al respecto como asimismo sobre la imprescriptibilidad de la acción enderezada, señalando los tratados internacionales que regulan la materia.

A folio 10, rola el acta de la notificación de la demanda, practicada de conformidad al artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, el día 04 de agosto de 2020.

A folio 12, compareció el Fisco de Chile, representado por la abogada procuradora fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, Ruth Israel López, contestando la demanda civil de indemnización de perjuicios, solicitando el rechazo de la acción indemnizatoria en todas sus partes, con costas; en subsidio, que se rebaje sustancialmente el monto pretendido.

Como primera opone la excepción de reparación integral, sostiene que resulta improcedente la indemnización alegada por haber sido reparados los demandantes, principalmente a través de tres tipos de compensaciones, (a) reparación mediante transferencias directas de dinero, (b) reparaciones



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VXTJXJXXNCZ

«RIT»

Foja: 1

mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, y
(c) reparaciones simbólicas.

Hace hincapié que en la especie, los actores y actoras han percibido beneficios pecuniarios al amparo de la Ley N°19.992 y sus modificaciones, sobre prisioneros y torturados políticos, que establece una pensión anual reajutable de \$1.353.798 para beneficiarios menores de 70 años; de \$ 1.480.284 para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$ 1.549.422, para beneficiarios mayores de 75 años de edad, a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo “Listado de Prisioneros Políticos y Torturados” de la nómina de personas reconocidas como víctimas. Adicionalmente, el actor recibió Aporte Único de Reparación Ley 20.874, por \$1.000.000.

Agrega que a los beneficiarios, tanto de la Ley 19.234 como de la Ley 19.992, les fue concedido el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en servicios de salud del país, agregando que también se les otorgaron beneficios educacionales, consistentes en la continuidad gratuita de estudios básicos, medios o superiores, a través de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación; y asimismo, beneficios en vivienda; de lo que resulta concluir que los referidos mecanismos de reparación han compensado precisamente aquellos daños, no pudiendo ser, entonces, reparados nuevamente; citando jurisprudencia relativa a tal situación.

En subsidio, opone excepción de prescripción extintiva de 4 años con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo Código, puesto que de acuerdo con el relato fáctico de los demandantes, las privaciones de libertad y torturas ocurrieron respecto de San Juan Rojas, el 25 de agosto de 1974; Moreno Agurto, el 25 de enero de 1982; Maulén Loyola, los primeros días de 1974; Pérez Cuevas, el 20 de marzo de 1985; Ramírez Kraljevich, el 20 de Marzo de 1985; Arce Vivanco, el 12 de septiembre de 1973; Vicuña Llaitul, el 27 de Mayo de 1985; Lobos Sánchez, el 6 de noviembre de 1974; Cruz Navarrete, el



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VXTJXJXXNCZ

«RIT»

Foja: 1

11 de mayo de 1984; y Cava Zapata, el 14 de septiembre de 1973, respectivamente.

Sostiene que aun considerándose que la prescripción estuvo suspendida durante el período de la dictadura militar, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el **11 de agosto de 2020**, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332.

En subsidio, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la anotada fecha de notificación de la acción civil, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2.515 del Código Civil.

Añade que los tratados internacionales que rigen en esta materia, no establecen de manea explícita la imprescriptibilidad en materia indemnizatoria civil, por lo que no existiendo una norma especial debe recurrirse al derecho común; pues cualquiera sea el origen o naturaleza de la indemnización de perjuicios, su contenido es netamente patrimonial.

Destaca que Chile, al ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana, formuló una reserva en orden a que el reconocimiento de la competencia tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refiere a hechos posteriores a la fecha del depósito del instrumento de ratificación, esto es, el 21 de agosto de 1990, o, en todo caso, a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior al 11 de marzo de 1990.

En subsidio, alega que la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales; por último, alega la improcedencia del cobro de reajustes e intereses.

A **folio 16**, la parte demandante evacuó el trámite de la réplica, ratificando los fundamentos de hecho y derecho invocados en el libelo



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VXTJXXNCZ

«RIT»

Foja: 1

indemnizatorio y controvirtiendo todas y cada una de las excepciones alegadas por el Fisco.

A folio 18, el Fisco evacuó el trámite de la dúplica, reiterando las argumentaciones expuestas en su contestación de la demanda, insistiendo en sus excepciones de fondo.

A folio 19, se omitió el llamado a conciliación y se recibió la causa a prueba.

A folio 53, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: A folio 1 comparece el abogado Omar Fernando Cabrera Cabezas, en calidad de mandatario judicial de: 1) **HEDDY LEONOR SAN JUAN ROJAS**; 2) **CARLOS HENRIQUE MORENO AGURTO**; 3) **MANUEL JESÚS MAULEN LOYOLA**; 4) **RAFAEL ENRIQUE PEREZ CUEVAS**; 5) **SONIA PAZ RAMIREZ KRALJEVICH**; 6) **VICTORIA GUILLERMINA VICUÑA LLAITUL**; 7) **ALEN LOBOS SANCHEZ**; 8) **WALDO MILTON CRUZ NAVARRETE**; 9) **FERNANDO SEGUNDO CAVA ZAPATA**; y 10) **MANUEL BENJAMIN ARCE VIVANCO**, interponiendo demanda de indemnización de perjuicios, en juicio ordinario, en contra del **FISCO DE CHILE**, solicitando se le condene a pagar a cada uno de los demandantes la suma de \$200.000.000, o la suma de dinero que se estime en justicia y equidad, más reajustes e intereses desde la fecha de interposición de la demanda y hasta el pago efectivo, todo ello con costas.

SEGUNDO: Que, notificada legalmente la demanda, fue contestada conforme las alegaciones y defensas reseñadas en la parte expositiva, mismas que las partes replicaron y duplicaron oportunamente.

TERCERO: Con el objeto de acreditar sus dichos, la parte demandante rindió únicamente prueba instrumental, inobjetada de contrario, consistente en:



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VXTJXJXXNCZ

«RIT»

Foja: 1

A folio 37 y 38:

1.- Certificado de daño psicológico de los demandantes, emanado de Centro de Salud Mental y Derechos Humanos CINTRAS.

2.- Copias de las carpetas del Instituto de Derechos Humanos de Chile (INDH), respecto cada uno de los demandantes de autos.

A folio 44:

3.- Texto denominado: “Consecuencias de la prisión política y torturas”, elaborado por la Comisión Nacional de Prisión Política y Torturas de Chile.

4.- Texto denominado: “Consecuencias de la tortura en la sociedad chilena”.

5.- Texto denominado: “Consecuencias psicosociales de la represión Política”, elaborado por Elizabeth Lira.

6.- Texto denominado: “Características del daño y trauma en afectados directos de violaciones a los DDHH”, elaborado por el Psicólogo Freddy Silva G. Coordinador Equipo Especializado PRAIS Servicio de Salud Aconcagua, año 2017.

7.- Informe en términos generales sobre las secuelas dejadas en el plano de salud mental relacionadas con las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar caso: D. Hernán Díaz Jiménez.

8.- Texto denominado: “Las peores cicatrices no siempre son físicas: la tortura psicológica”, año 2007.

9.- Texto denominado: “Tortura y trauma: el viejo dilema de las taxonomías psiquiátricas”, autor Carlos Madariaga.

10.- Texto denominado: “Tortura y trauma psicosocial”, autor Carlos Madariaga.

11.- Texto denominado: “Víctimas de violaciones a los derechos humanos; situaciones represivas y experiencias traumáticas”.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VXTJXJXXNCZ

«RIT»

Foja: 1

12.- Texto denominado: “Informe sobre la Comisión Nacional de Prisión Política y Torturas del Estado de Chile”.

13.- Nomina de Personas reconocidas como Victimas de Prisión Política y Torturas de Chile, año 2004, Informe Valech I.

14.- Nomina de Personas reconocidas como Victimas de Prisión Política y Torturas de Chile, año 2004, Informe Valech II.

CUARTO: A su turno la parte demandada solicitó, en el primer otrosi de folio 12, oficio al Instituto de Previsión Social para informe sobre los montos percibidos por los y las demandantes Heddy Leonor San Juan Rojas; Carlos Enrique Moreno Agurto; Manuel Jesús Maulén Loyola; Rafael Enrique Pérez Cuevas; Sonia Paz Ramírez Kraljevich; Manuel Benjamín Arce Vivanco; Victoria Guillermina Vicuña Llaitul; Alen Lobos Sánchez; Waldo Milton Cruz Navarrete; y Fernando Segundo Cava Zapata, especialmente en relación a las leyes 19.123, 19.234, 19.992, 20.874.

A folio 50, se acompañó el informe del Instituto de Previsión Social, el cual señala, en síntesis, que los actores y actoras han percibido los siguientes beneficios:

1.- Heddy Leonor San Juan Rojas, cédula de identidad 5.672.520-2, (a) \$34.933.125, pensión Ley 19.234, (b) \$10.455.554, pensión Ley 19.992, (c) \$1.000.000 bono Ley 20.874, (d) \$605.012, aguinaldos, (e) \$182.974, pensión actual;

2.- Carlos Enrique Moreno Agurto, cédula de identidad 5.843.909-6, (a) \$28.573.722, pensión Ley 19.992, (b) \$1.000.000 bono Ley 20.874, (c) \$475.162, aguinaldos, (d) \$207.261, pensión actual;

3.- Manuel Jesús Maulen Loyola, cédula de identidad 6.120.077-0, (a) \$28.546.107, pensión Ley 19.992, (b) \$1.000.000 bono Ley 20.874, (c) \$475.162, aguinaldos, (d) \$207.261, pensión actual;



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VXTJXXNCZ

«RIT»

Foja: 1

4.- Rafael Enrique Pérez Cuevas, cédula de identidad 8.535.579-1, (a) \$17.972.461, pensión Ley 19.992, (b) \$1.000.000 bono Ley 20.874, (c) \$312.883, aguinaldos, (d) \$189.552, pensión actual;

5.- Sonia Paz Ramírez Kraljevich, cédula de identidad 7.547.515-2, (a) \$17.972.461, pensión Ley 19.992, (b) \$1.000.000 bono Ley 20.874, (c) \$312.883, aguinaldos, (d) \$189.552, pensión actual;

6.- Manuel Benjamín Arce Vivanco, cédula de identidad 6.344.614-9, (a) \$17.972.461, pensión Ley 19.992, (b) \$1.000.000 bono Ley 20.874, (c) \$312.883, aguinaldos, (d) \$189.552, pensión actual;

7.- Victoria Guillermina Vicuña Llaitul, cédula de identidad 9.450.859-2, (a) \$28.259.281, pensión Ley 19.992, (b) \$1.000.000 bono Ley 20.874, (c) \$475.162, aguinaldos, (d) \$189.552, pensión actual;

8.- Alen Lobos Sánchez, cédula de identidad 4.125.600-1, (a) \$30.944.174, pensión Ley 19.992, (b) \$3.000.000 bono Ley 19.992, (c) \$1.000.000 bono Ley 20.874, (d) \$475.162, aguinaldos, (d) \$216.944, pensión actual;

9.- Fernando Segundo Cava Zapata, cédula de identidad 7.225.751-0, (a) \$27.695.196, pensión Ley 19.992, (b) \$1.000.000 bono Ley 20.874, (c) \$475.162, aguinaldos, (d) \$189.552, pensión actual; y

10.- Waldo Milton Cruz Navarrete, cédula de identidad 7.512.860-6, (a) \$28.259.281, pensión Ley 19.992, (b) \$1.000.000 bono Ley 20.874, (c) \$475.162, aguinaldos, (d) \$189.552, pensión actual.

QUINTO: Que, son hechos que constan en la causa por no haber sido objeto de controversia, más aún se encuentran acreditados con el mérito de los documentos reseñados en los motivos anteriores, los siguientes:

1.- Que las actoras y actores Heddy Leonor San Juan Rojas; Carlos Enrique Moreno Agurto; Manuel Jesús Maulén Loyola; Rafael Enrique Pérez Cuevas; Sonia Paz Ramírez Kraljevich; Manuel Benjamín Arce Vivanco; Victoria Guillermina Vicuña Llaitul; Alen Lobos Sánchez; Waldo Milton



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VXTJXJXXNCZ

«RIT»

Foja: 1

Cruz Navarrete; y Fernando Segundo Cava Zapata, están reconocidos como víctimas de Prisión Política y Tortura (Ley Valech), pues son beneficiarios de las leyes de reparación Nros. 19.234, 19.992, 20.874 y 20.134.

2.- Que Heddy Leonor San Juan Rojas, estuvo detenida entre el 25 de agosto de 1974 y el 16 de septiembre del mismo año.

Carlos Enrique Moreno Agurto, estuvo detenido entre el 25 de enero de 1982 y el 31 de enero del mismo año.

Manuel Jesús Maulén Loyola, estuvo detenido entre el 4 de enero de 1974 y el 06 de marzo de 1974.

Rafael Enrique Pérez Cuevas, estuvo detenido entre el 22 de marzo de 1985 y el 24 de abril del mismo año, posteriormente fue relegado a Punitaqui donde permaneció hasta el 07 de mayo de 1985.

Sonia Paz Ramírez Kraljevich, estuvo detenida entre el 22 de marzo de 1985 y el 02 de abril del mismo año, se encontraba embarazada al momento de su detención.

Manuel Benjamín Arce Vivanco, estuvo detenido entre el 12 de septiembre de 1973 y el 05 de octubre del mismo año.

Victoria Guillermina Vicuña Llaitul, estuvo detenida entre el 27 de mayo de 1985 y el 14 de junio del mismo año.

Alen Lobos Sánchez, estuvo detenido entre el 12 de mayo 06 de noviembre de 1974 y el 27 de abril de 1976, viajó a Inglaterra y tuvo prohibición de ingresar al país hasta el año 1987.

Fernando Segundo Cava Zapata, estuvo detenido entre el 12 y el 22 de septiembre de 1973; y

Waldo Milton Cruz Navarrete, estuvo detenido entre el 11 de mayo de 1984 y el 11 de noviembre de 1988.

Que todos los demandantes fueron violentados tanto física como psicológicamente por agentes del Estado debido a sus convicciones políticas.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VXTJXJXXNCZ

«RIT»

Foja: 1

3.- Que los actores Heddy Leonor San Juan Rojas; Carlos Enrique Moreno Agurto; Manuel Jesús Maulén Loyola; Rafael Enrique Pérez Cuevas; Sonia Paz Ramírez Kraljevich; Manuel Benjamín Arce Vivanco; Victoria Guillermina Vicuña Llaitul; Alen Lobos Sánchez; Waldo Milton Cruz Navarrete; y Fernando Segundo Cava Zapata, en sus calidades de víctima de represión política han recibido por aplicación de las Leyes 19.234, 19.992 y 20.874, respectivamente, las cantidades de \$46.993.691; \$30.048.884; \$30.021.269; \$19.285.344; \$19.285.344; \$19.285.344; \$29.734.443; \$35.419.336; \$29.170.358; y \$29.734.443, por concepto de pensión, bonos, aporte único y aguinaldos; y asimismo, perciben en el mismo orden que han sido individualizados una pensión mensual que al mes de agosto de 2020, ascendía a \$182.974; \$207.261; \$207.261; 189.552; \$189.552; \$189.552; 189.552; 216.944; \$189.552; y \$189.552.

SEXTO: Que como cuestión previa resulta necesario y oportuno dejar consignado que el 11 de Noviembre de 2003, transcurridos 13 años desde que se restableció el Estado de Derecho en nuestro país, durante el gobierno del Ex Presidente, S.E Ricardo Lagos Escobar, se dictó el Decreto N° 1040, mediante el cual se creó la “Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, para el Esclarecimiento de la Verdad acerca de las Violaciones de Derechos Humanos en Chile”, cuyo objetivo, de acuerdo a las palabras del propio gestor, fue determinar el universo de las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, entre Septiembre de 1973 y Marzo de 1990; que se materializó en un Informe que consta de más de 500 páginas, elaborado con 28.000 testimonios considerados válidos (se recibió testimonio de 35.865 personas, residentes en Chile como en el extranjero); de los que, con la debida prudencia y cautela, se dejó constancia en el mismo informe, sin individualizar nombres ni algún otro dato personal, sino únicamente el sexo del declarante, y el lugar en que fue detenido.

Conjuntamente con el informe, la Comisión elaboró un listado con los nombres de las personas a quienes se les reconoció la calidad de Presos Políticos y Torturados, con un total de **27.153** personas.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VXTJXJXXNCZ

SEPTIMO: Que, posteriormente, y con ocasión del resultado de la labor de la Comisión, fue dictada la Ley N° 19.992, publicada con fecha 24 de Diciembre de 2004, que “Establece Pensión de Reparación y Otorga otros Beneficios a Favor de las Personas que indica”, cuyo artículo primero, contenido en el Título I “De la pensión de reparación y bono”, dispone: *“Establécese una pensión anual de reparación en beneficio de las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos individualizadas en el anexo “Listado de Prisioneros Políticos y Torturados”, de la Nómina de personas reconocidas como Víctimas, que forma parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por el decreto supremo N° 1.040, de 2003, del Ministerio del Interior.”*

El artículo segundo, establece que la pensión anual aludida, ascendería a \$1.353.798.- para aquellos beneficiarios menores de 70 años de edad; a \$1.480.284.- para aquellos beneficiarios mayores de 70 o más años pero menores de 75 años; y a \$ 1.549.422.- para aquellos beneficiarios de 75 o más años de edad; pensión que se pagaría en 12 cuotas mensuales de igual monto, reajutable conforme lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Ley N° 2.448, de 1979, o en las normas legales que reemplacen dicha disposición.

Su inciso segundo, establece que la pensión referida, sería incompatible con aquellas otorgadas en las leyes números 19.234, 19.582 y 19.881, pudiendo quiénes se encuentren en tal situación optar por uno de estos beneficios en la forma que determine el Reglamento; precisando que las personas que ejercieran dicha opción, tendrían derecho a un bono de \$ 3.000.000.-, el que se pagaría por una sola vez dentro del mes subsiguiente de ejercida la opción.

El artículo séptimo, dispone que tanto la pensión como el bono se devengarán a partir del primer día del mes subsiguiente a la fecha en que los beneficiarios presenten sus solicitudes, mismas que podrían impetrarse desde la publicación de la misma ley.

OCTAVO: Que, por otro lado, mediante la Ley N° 20.874, publicada con fecha 29 de Octubre de 2015, que “Otorga un aporte único, de carácter



«RIT»

Foja: 1

reparatorio, a las víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por el Estado de Chile”, de acuerdo a su artículo primero, se otorgó un aporte único en carácter de reparación parcial, de \$1.000.000.-, a los titulares individualizados en la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y a los titulares incluidos en la nómina de víctimas de prisión política y tortura elaborada por la Comisión asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y víctimas de Prisión Política y Tortura, conforme a las leyes N° 19.992 y N° 20.405, respectivamente.

El inciso tercero, dispone que: *“Con todo, el aporte a que se refiere este artículo será imputable al monto que, en su caso, se otorgue por concepto de reparación pecuniaria a cada víctima de prisión política y tortura.”*

NOVENO: Que, los demandantes detentan la calidad de “Prisioneros Políticos y Torturados”, constando en autos que han percibido, en tal calidad, las sumas señaladas en el considerando quinto, numeral tercero de este fallo, lo que lleva a establecer que han sido y son beneficiarios de las Leyes 19.992 y 20.874.

DECIMO: Asentado lo anterior, toca referirse a las defensas planteadas por el Fisco, la primera es la excepción de reparación integral o satisfactiva, fundada, como ya se explicitara, en que los actores han sido indemnizados, en razón de haber recibido beneficios pecuniarios al amparo de las Leyes N° 19.992 y 20.874; por lo que resultaría improcedente que sean indemnizados por daños cuya génesis radica en los mismos hechos.

Al respecto, es necesario señalar que tal como lo sostuvo la jurisprudencia la Comisión Valech no pretendió, en estricto rigor, efectuar una “transacción” con cada uno de los beneficiados, para así precaver la interposición de una acción como la del caso de autos; cuestión que no aparece del tenor literal de la ley, ni tampoco de su espíritu, toda vez que en ella se establece que la pensión sería incompatible con aquellas otorgadas en las leyes números 19.234, 19.582 y 19.881, pudiendo quienes se encontraren en tal situación optar por uno de dichos beneficios en la forma que determine



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VXTJXJXXNCZ

«RIT»

Foja: 1

el Reglamento; situación de la que resulta entonces concluir que, no obstante ser los actores beneficiarios de la pensión otorgada por el Estado, en su condición de “prisioneros políticos torturados”, tal hecho no es óbice para que los afectados interpusieran la acción indemnizatoria del caso de autos.

Por lo demás, la situación que afectó a los demandantes está dentro de lo que la teoría del derecho de daños estima procedente, en orden a reparar el daño causado y nada más que el daño, centrando la función primordial de la reparación en la víctima. Así, si el Estado es culpable por los atentados a la dignidad humana, la responsabilidad civil se concretiza en la teoría de daños, cuya función esencial es su reparación, efecto que a su vez se radica en el patrimonio del Estado quien tiene el deber de repararlo, entre otras formas, por indemnizaciones pecuniarias.

En tal sentido, está acreditado que los demandantes fueron sometidos a detenciones ilegales, periodos en los cuales estuvieron constantemente expuestos a agresiones y apremios ilegítimos, para luego ser liberados. Así las cosas, el daño que reclaman se enmarca en el daño moral y la indemnización por ese daño es una manera de abordar la reparación, pues no se pueden borrar los hechos, y se configura la obligación de otorgar una indemnización pecuniaria que compense el daño causado que no ha sido íntegramente reparado, por lo que la excepción de pago y/o reparación integral opuesta por el Fisco no podrá prosperar.

UNDECIMO: Que, el Fisco también opuso la excepción de prescripción de las acciones indemnizatorias, fundada en los argumentos ya explicitados en el presente fallo.

Al respecto sólo caber tener especialmente presente que del tenor literal del Artículo 5° de nuestra Carta Fundamental, fluye que el ejercicio de la soberanía se realiza por el pueblo a través del plebiscito y también, se realiza por las autoridades que la misma Constitución establece; y que dicho ejercicio, reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana; y es deber de los órganos del Estado respetar y



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VXTJXJXXNCZ

«RIT»

Foja: 1

promover tales derechos, garantizados por la Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Por consiguiente, a través de dicha disposición constitucional, se incorporan al derecho nacional las obligaciones contempladas en los instrumentos internacionales, entre las que destaca el deber de indemnizar o reparar íntegramente los daños cometidos por violaciones de los derechos humanos; adquiriendo rango constitucional.

Al efecto la Excma. Corte Suprema, en los autos Rol **22.856-2015**, de fecha 29 de Diciembre de 2015, ha señalado que, *“tratándose de un delito de lesa humanidad -lo que ha sido declarado en la especie-, cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la correlativa acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contempladas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional, en armonía con el inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que insta el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno, que, en virtud de la ley N° 19.123, reconoció en forma explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de aquellos calificados como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973-1990, regalías de carácter económico o pecuniario. En esta línea discurren también SCS Nros. 20.288-14, de 13 de abril de 2105; 1.424, de 1 de abril de 2014; 22.652, de 31 de marzo de 2015, entre otras.*

Por ende, cualquier pretendida diferenciación en orden a dividir ambas acciones y otorgarles un tratamiento desigual resulta discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad indispensables en un Estado de derecho democrático. Entonces, pretender el empleo de las disposiciones del Código Civil en la responsabilidad derivada de crímenes de lesa humanidad posibles de cometer con la activa



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VXTJXJXXNCZ

«RIT»

Foja: 1

colaboración del Estado, como derecho común supletorio a todo el régimen jurídico, hoy resulta improcedente.

Por lo demás, la reparación integral del menoscabo no se discute en el plano internacional, ni se circunscribe a los autores de los crímenes exclusivamente, sino también se prolonga hacia el mismo Estado. La preceptiva internacional no ha creado un sistema de responsabilidad, lo ha reconocido, desde que, sin duda, siempre ha existido, con evolución de las herramientas destinadas a hacer más expedita, simple y eficaz su declaración, en atención a la naturaleza de la violación y del derecho violentado.”

En conclusión, según lo expresado precedentemente, las excepciones de prescripción principal y subsidiaria serán desestimadas, por encontrar ambas su fundamento en normas de derecho interno, preceptos que, como ha quedado claramente explicitado, no son aplicables al caso de autos.

El argumento anterior, además ha sido reiterado recientemente en un fallo de fecha **6 de junio pasado**, que señala en su considerando “...**Octavo:** *Que, en suma, pesando sobre el Estado la obligación de reparar a las víctimas y sus familiares consagrado por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, el derecho interno no deviene en un argumento sostenible para eximirlo de su cumplimiento. No sólo por lo ya expresado sino porque este deber del Estado también encuentra su consagración en el derecho interno. En efecto, el sistema de responsabilidad del Estado deriva además del artículo 3° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que dispone que la Administración del Estado está al servicio de la persona humana, que su finalidad es promover el bien común, y que uno de los principios a que debe sujetar su acción es el de responsabilidad; y, consecuentemente con ello, en su artículo 4° dispone que “el Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado”. “Así, no cabe sino concluir que el daño moral causado por la conducta ilícita de los funcionarios o agentes del Estado autores de los*



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VXTJXJXXNCZ

«RIT»

Foja: 1

ilícitos de lesa humanidad en que se funda la presente acción, debe ser indemnizado por el Estado”. C.S Rol N° 130.949-2020.

DUODECIMO: Que, habiéndose desestimado las excepciones de reparación integral y de prescripción de la acción civil, toca pronunciarse sobre la procedencia de la indemnización pretendida.

Como se ha venido expresando, se encuentra acreditado que los actores Heddy Leonor San Juan Rojas; Carlos Enrique Moreno Agurto; Manuel Jesús Maulén Loyola; Rafael Enrique Pérez Cuevas; Sonia Paz Ramírez Kraljevich; Manuel Benjamín Arce Vivanco; Victoria Guillermina Vicuña Llaitul; Alen Lobos Sánchez; Waldo Milton Cruz Navarrete; y Fernando Segundo Cava Zapata, detentan la calidad de “Prisioneros Políticos y Torturados”, por lo que es del todo plausible sostener que las detenciones, torturas, vejámenes que padecieron, se debieron al hecho de sus convicciones políticas, como se señala en la demanda.

Siendo dichas circunstancias las que motivaron la detención y posterior tortura física y psicológica de los demandantes, es pertinente señalar que los actos ejercidos por agentes del Estado en sus personas, debieron necesariamente afectar el estado físico y emocional de cada uno de ellos, de manera inmediata y durante todo el período que estuvieron detenidos, como también en los tiempos futuros.

Asimismo, con el mérito de los informes de daños generales acompañados a folio 44, unido al informe de daños particular acompañado a folio 38, es posible establecer una presunción grave, precisa y concordante en cuanto a que personas que han sido violentadas física y psicológicamente por agentes del Estado, como en el caso de autos, sufrieron perjuicios, daños emocionales y acarrear secuelas que deben ser reparadas, por cuanto es deber del Estado respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana como son la integridad física y psíquica, no siendo tolerable bajo ningún respecto que sus agentes hayan lesionado los derechos fundamentales de los demandantes, por lo que el Estado debe responder.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VXTJXJXXNCZ

DECIMO TERCERO: Así las cosas, el daño experimentado por los actores sólo se puede enmarcar dentro de aquél denominado “moral”, por lo que resulta plausible entonces acoger la demanda, y tal circunstancia conlleva a determinar los perjuicios que las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos sufrieron en el régimen militar.

Ello es una cuestión de ponderación y valoración que se le impone al tribunal, con el objeto de establecer y precisar los daños, la aflicción y el dolor, mismos que no solo son posibles de presumir fundadamente, sino también por el principio de normalidad, que indica que cualquier persona que es o ha sido objeto de apremios ilegítimos y torturas por agentes del Estado sufre daños que deben ser reparados.

En esta labor de determinación del quantum indemnizatorio, este sentenciador considera como aspectos relevantes las siguientes circunstancias: **(a)** que los demandantes detentan la calidad de “Prisioneros Políticos y Torturados”, y en tal condición fueron sometidos a detenciones ilegales, vejámenes y torturas por agentes del Estado quienes lesionaron sus derechos fundamentales a la integridad física y psíquica; y **(b)** las indemnizaciones fijadas por los tribunales superiores de justicia en circunstancias análogas.

DECIMO CUARTO: Sin perjuicio de lo anterior y que, además, se viene desestimando la excepción de reparación integral y/o satisfactoria, este sentenciador es del parecer de considerar en la indemnización final, los montos percibidos por los demandantes al amparo de las Leyes 19.992 y 20.874, por concepto de pensiones, bonos, aporte único y aguinaldos, teniendo para ello la naturaleza de las pensiones otorgadas por el Estado en este tipo de materias.

En efecto, el hecho dañoso que motivó la dictación de las leyes de reparación, a saber ley 19.992 y ley 20. 874, entre otras, fue el hecho ilícito del actuar de los agentes del Estado hacia víctimas que sufrieron persecución política, según quedó así recogido en el Informe Valech. Enseguida, debe tenerse especial atención que el hecho ilícito es la causa adecuada del



«RIT»

Foja: 1

beneficio y del daño, es decir, que tanto el beneficio como el daño provienen del mismo hecho ilícito.

En este aspecto, las leyes de reparación fueron una reacción positiva del Estado tendientes a lograr intentar reparar el daño causado, lo que en ningún caso inhibe o coarta el derecho a que las personas que se sienten perjudicadas o insatisfechas accionen y soliciten la reparación integral de su daño.

A mayor abundamiento, tanto las leyes dictadas al efecto como las indemnizaciones otorgadas por los tribunales cumplen una función reparadora de daños, que emana de la misma naturaleza, cual es el daño moral, siendo ambas compatibles y complementarias.

Así las cosas, la regla de la *Compensatio lucri cum damno* es un principio de imputación de daños, dentro de la teoría del derecho de daños y la reparación integral, por lo que emanando el mismo daño del actuar ilícito de los agentes del Estado, teniendo además la misma naturaleza cual es la reparación del daño moral por ser víctimas de la Responsabilidad del Estado, el monto ya referido y otorgado estos años debe ser considerado en la suma final a recibir por parte de las víctimas, tal como en el mismo sentido lo resolvió la Sentencia ingreso Corte 1763-2020, de esta Corte de Apelaciones.

DÉCIMO QUINTO: Que por otro lado considerar el monto que han recibido los demandantes no significa descartar la premisa fundamental de que todo daño debe ser íntegramente reparado. Citando al profesor Llamas Pombo “*difícil es ponderar la correcta valoración del sufrimiento, la pena, angustia, las vivencias desagradables e incluso el trauma psíquico, más aún traducir a una categoría diferente la de la reparación económica de los daños morales y ello queda en definitiva a la prudencia de los tribunales, dentro de los límites de las pretensiones resarcitivas producidas en la causa*” (Eugenio Llamas Pombo. “Las formas de prevenir y reparar el daño”. Wolters Kluwer, España 2020, pág.203.)

Por su parte, en la doctrina nacional, la profesora Domínguez Hidalgo refiere que la forma predilecta y más eficiente de tutela personal es la acción



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VXTJXJXXNCZ

«RIT»

Foja: 1

indemnizatoria. En la especie, la *acción de responsabilidad civil alcanza esa eficiencia porque es la única acción civil que se funda precisamente solo en la condición de persona. Siguiendo a López Jacoste, la responsabilidad civil se ha constituido en una garantía genérica de plenitud personal* (Carmen Domínguez Hidalgo. “El Principio de reparación integral en sus contornos actuales”, Thomson Reuters, año 2019, pág. 87)

En consecuencia, es perfectamente posible la compatibilidad entre los beneficios pecuniarios otorgados por las leyes de reparación con las indemnizaciones que otorga el poder judicial, y no se inhibe conceder un monto por el daño extrapatrimonial por todo aquello que se estime que no ha sido reparado. Se cumple así el principio de reparación integral del daño, cuyo reconocimiento en la doctrina es aceptada como la función primordial del derecho de daños y que permite además, dar fuerza a los argumentos propios de la responsabilidad civil.

Conviene destacar que la Ley 19.992 en su mensaje destaca que “*la prisión política y las torturas constituyeron una práctica institucional del Estado que es absolutamente inaceptable y ajena a la tradición histórica de Chile*”. Eso hizo necesario la dictación de la ley en reconocimiento a aquellas víctimas y debe el Estado “*entregar una compensación que, aunque sea austera, es una forma de reconocer su responsabilidad en lo ocurrido*.”

DÉCIMO SEXTO: Que, en consecuencia, y según lo expuesto precedentemente, se fijarán las siguientes indemnizaciones de perjuicios, por daño moral, que deberá pagar el Estado a los demandantes, en sus calidades de víctimas de violación a sus derechos fundamentales:

- 1.- Heddy Leonor San Juan Rojas: la suma de \$50.000.000.-
- 2.- Carlos Enrique Moreno Agurto: la suma de \$50.000.000.-
- 3.- Manuel Jesús Maulén Loyola: la suma de \$50.000.000.-
- 4.- Rafael Enrique Pérez Cuevas: la suma de \$50.000.000.-
- 5.- Sonia Paz Ramírez Kraljevich: la suma de \$50.000.000.-



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VXTJXJXXNCZ

«RIT»

Foja: 1

6.- Manuel Benjamín Arce Vivanco: la suma de \$50.000.000.-

7.- Victoria Guillermina Vicuña Llaitul: la suma de \$50.000.000.-

8.- Alen Lobos Sánchez: la suma de \$50.000.000.-

9.- Waldo Milton Cruz Navarrete: la suma de \$50.000.000.- y

10.-Fernando Segundo Cava Zapata: la suma de \$50.000.000.-

Las sumas establecidas se estiman justas y equitativas, considerando que los actores han sido y son beneficiarios de las leyes de reparación respectivas ya indicadas, y deberán pagarse debidamente reajustadas desde que la sentencia se encuentre ejecutoriada; más los intereses corrientes para operaciones de crédito de dinero no reajustables, contados desde que el Fisco incurra en mora, esto es, a contar de la fecha de notificación del cumplimiento incidental.

Por estas consideraciones, y visto además, lo dispuesto en los artículos 144, 160, 170, 254, 748 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; el Decreto 1040, de 26 de Septiembre de 2003, la Ley 19.992 y la Ley 20.874;

SE DECLARA:

1.- Que **se rechazan** las excepciones opuestas por el Fisco de Chile.

2.- Que, **se acoge** la demanda intentada a folio 1, y se condena al Fisco de Chile a pagar a los actores, las sumas señaladas en el considerando **décimo sexto**.

3.- Que, no se condena en costas al Fisco de Chile.

Rol C-8810-2020.-

Regístrese, notifíquese y elévese en consulta si no se apelare.

**Dictada por Wilson Eduardo Rodríguez Rodríguez,
Juez Suplente.- (Fgm).-**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VXTJXJXXNCZ

«RIT»

Foja: 1

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, treinta de Noviembre de dos mil veintitrés**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VXTJXJXXNCZ